

## COMUNIDAD DE MADRID

### CONTRATACIÓN

#### RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS

**ASUNTO:** Interposición de RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS contra la adjudicación del acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid,

Expediente: A/SER-014357/2022

D. Salvador Cambló Giménez, con DNI [REDACTED], en representación de la empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L., (RD Post) con CIF B 60261815, correo electrónico licitaciones@grupoalconsultoria.com y tfno.952 21 93 57, bajo la dirección letrada de D. José María Moreno Gayá (ICAMA 10530), comparezco y como mejor proceda en Derecho:

#### EXPONE

I.- RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L, en adelante RD POST, concurrió a la licitación (Lotes 2 y 3), convocada por la Comunidad de Madrid, Contrato: A/SER-014357/2022, para la adjudicación del acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid.

II.- Que el 15 de diciembre de 2022 se notifica a RD Post la Orden de 14 de diciembre de 2022 del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda Adjudicar el acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, dividido en tres lotes, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de fecha 12 de diciembre de 2022, al haber obtenido la mayor puntuación, una vez sumados el criterio económico y los criterios objetivos valorables en cifras en los lotes 1, 2 y 3, a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E Expediente: A/SER-014357/2022

III.- Por la disconformidad con la referida decisión y en interés de salvaguardar sus intereses legítimos se interpuso recurso especial de Contratación el 9 de enero de 2023.

IV.- Que dicho recurso especial fue desestimado el 15 de febrero de 2023.

V.- Que con posterioridad a dicha Resolución ha aparecido documento posterior de valor esencial para la resolución del asunto que, evidencia el error de la resolución recurrida, concretamente la **Sentencia 1080/2023 de 22 de marzo de 2023 del TSJ de Cataluña** sala de lo contencioso, en la que desestimando el recurso Contencioso interpuesto por CORREOS contra XALOC y RD Post, admite la valoración de las oficinas ofertas por RD Post en base al Contrato con CORREOS, reafirmando el derecho de los operadores postales privados al acceso a la red postal del operador designado para prestar el SPU.

VI.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y concordantes, interpone **recurso especial de revisión de actos nulos** que establece dicho precepto, por las causas previstas en el artículo 125.1 a y b del mismo cuerpo legal, contra la ***Orden de 14 de diciembre de 2022 del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda Adjudicar el acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, dividido en tres lotes, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de fecha 12 de diciembre de 2022, al haber obtenido la mayor puntuación, una vez sumados el criterio económico y los criterios objetivos valorables en cifras en los lotes 1, 2 y 3, a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E Expediente: A/SER-014357/2022***, al entender que son contrarios a derecho, en base a los siguientes:

## ANTECEDENTES

RD POST, concurrió a los Lotes 2 (Certificados) y 3 (Notificaciones) de la licitación, convocada por la Comunidad de Madrid, (Contrato: A/SER-014357/2022) para la adjudicación del acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid.

El día **23 de noviembre de 2022** se publica acta con la valoración de las proposiciones económicas presentadas electrónicamente por las empresas admitidas en la licitación del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES A LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dividido en tres lotes, en base a los criterios de adjudicación recogidos en el apartado 8 de la cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Realizada con fecha del pasado 14 de noviembre la apertura en acto público de las ofertas económicas de los empresarios admitidos y de los criterios de evaluación directa por aplicación de fórmulas, se procede a realizar la valoración de dichos criterios de evaluación, asignándose las puntuaciones conforme a las reglas establecidas en el apartado 8 de la cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas particulares para determinar qué oferta de las admitidas obtiene la mayor puntuación en cada uno de los lotes.

En relación al **Lote 2** Correo certificado (nacional, internacional y urgente), la PUNTUACIÓN TOTAL ha resultado la siguiente:

- **CORREOS: 62 Puntos**
- **RECERCA: 51,86 Puntos**

No obstante, en relación a la puntuación obtenida por RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L. (en adelante, RD POST) en el punto **8.2. Criterio: Número de oficinas de admisión de envíos, por encima del mínimo exigido. Ponderación: hasta 30 puntos**, y más concretamente en los puntos **8.2.1 Oficinas en el municipio de Madrid: hasta 10 puntos** y **8.2.2 Oficinas en las localidades de la Comunidad de Madrid relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas: hasta 10 puntos**, la mesa manifiesta lo siguiente:

*“Por parte de la mesa solo se pueden tener en cuenta a efectos de valoración en este criterio las oficinas indicadas en su listado por RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L. con contrato de arrendamiento o contrato de colaboración y no las oficinas en las que el título bajo el cual se tiene el uso de la misma indica contrato Correos ya que por lo que cualquier centro incluido en el ámbito del acuerdo marco cuando tenga que realizar un depósito de envíos debería hacerlo obligatoriamente a través de las oficinas de la empresa seleccionada, es decir, de las que ésta acredite disponer para la recepción de envíos, y esa empresa podría hacer uso de la red postal de CORREOS mediante su entrega en el centro de admisión masiva correspondiente acordado con CORREOS, siguiendo a partir de ahí su curso como el resto de envíos que utilizan dicha red; pero estos centros usuarios del acuerdo marco no puedan acceder directamente a la red de CORREOS para realizar un depósito sin pasar por la empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L., siendo esta sociedad la que debe introducirlos directamente en la red para la continuación del proceso hasta su entrega al destinatario final”.*

En **Acta de 2 de diciembre de 2022** La Mesa considera, que el sistema al que se refiere la empresa no viene contemplado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, concretamente en sus apartados 4 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL TRABAJO, y 5 FACTURACIÓN, pues es la propia Administración la que determina en los pliegos de condiciones reguladores del acuerdo marco como quiere que sea prestado el servicio postal a los centros de la Comunidad de Madrid por parte de los adjudicatarios del mismo, por tanto, aquel sistema no se puede tener en cuenta.

Con fecha **25 de noviembre de 2022**, la empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L., remite a la Junta Central de Compras un escrito dirigido a la Mesa de Contratación de la Junta Central de Compras formulando alegaciones contra el acuerdo de dicha Mesa de fecha 23 de noviembre del 2022, por el que se valoran las ofertas presentadas a la licitación del lote 2 Correo certificado (nacional, internacional y urgente) del acuerdo marco.

En su escrito RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L. viene a cuestionar la falta de valoración de las oficinas de atención al público identificadas como CORREOS en su oferta, concretamente en lo referente a los subcriterios 8.2.1 Oficinas en el municipio de Madrid: hasta 10 puntos y 8.2.2 Oficinas en las localidades de la Comunidad de Madrid relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas:

hasta 10 puntos, y a cuyos efectos, la recurrente solicita la rectificación del acta de la Mesa de Contratación procediéndose a su valoración.

La **Mesa de contratación de 2 de diciembre de 2022**, se reafirma en lo acordado en su reunión de 23 de noviembre de 2022 y en cuanto a la segunda cuestión que plantea RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L, se refiere al alcance de los trabajos que figuran en los apartados 4.2 y 4.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, respecto a los que la empresa entiende que “De tales puntos, se deduce que la operativa que deberá seguir la empresa adjudicataria sería la de recogida de los envíos en las direcciones de los emisores de envíos postales dentro de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, en los casos en los que no sucediera así, las unidades acogidas al acuerdo marco podrán depositar sus envíos en la oficina de admisión más próxima de que disponga la empresa adjudicataria, pero en ningún caso se establece la posibilidad de entrega en cualquier otra oficina del territorio.

De esto modo, y según lo descrito en los puntos anteriores, queda claro que RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L. está facultada para realizar la recogida en cualquiera de las direcciones estipuladas de las entidades adheridas al acuerdo marco, y realizar el depósito de los envíos en cualquiera de las oficinas incluidas en su oferta, incluyendo las que se describen bajo el título de Contrato Correos”

La Mesa difiere en esa interpretación realizada por la empresa, pues lo que el PPT establece es que, como regla general “Las diferentes unidades acogidas a este acuerdo marco depositarán sus envíos en la oficina de admisión más próxima de que disponga la empresa adjudicataria.” Y añade” No obstante, se podrá solicitar la recogida de envíos a domicilio en aquellos edificios y centros de la Administración de la Comunidad de Madrid que se especifican en el Anexo III de este Pliego de Prescripciones Técnicas.”

Esa solicitud de la recogida de envíos a domicilio corresponderá a la Administración de la Comunidad de Madrid y además solo en los edificios y centros de la Administración de la Comunidad de Madrid que se especifican en el Anexo III de este PPT, por lo que no es a elección de la empresa.

La empresa también señala que “En el Acta de valoración de ofertas presentadas, la Mesa de Contratación da por hecho, sin solicitar aclaración al respecto, que los centros usuarios del acuerdo marco no podrán acceder directamente a la red de CORREOS”

Que el 15 de diciembre de 2022 se notifica a RD Post la Orden de 14 de diciembre de 2022 del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda Adjudicar el acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, dividido en tres lotes, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de fecha 12 de diciembre de 2022, al haber obtenido la mayor puntuación, una vez sumados el criterio económico y los criterios objetivos valorables en cifras en los lotes 1, 2 y 3, a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E Expediente: A/SER-014357/2022

- Lote 1: Correo ordinario (nacional, internacional y urgente)
- Lote 2: Correo certificado (nacional, internacional y urgente)

- Lote 3: Notificaciones administrativas

Por la disconformidad con la referida decisión y en interés de salvaguardar sus intereses legítimos se interpuso recurso especial de Contratación el 9 de enero de 2023

Que dicho recurso especial fue desestimado el 15 de febrero de 2023

Que con posterioridad a dicha Resolución han aparecido o puedan aparecer documentos posteriores de valor esencial para la resolución del asunto que, evidencien el error de la resolución recurrida, concretamente la Sentencia 1080/2023 de 22 de marzo de 2023 del TSJ de Cataluña sala de lo contencioso, en la que desestimando el recurso Contencioso interpuesto por CORREOS contra XALOC y RD Post, admite la valoración de las oficinas ofertadas por RD Post en base al Contrato con CORREOS, reafirmando el derecho de los operadores postales privados al acceso a la red postal del operador designado para prestar el SPU, **reconociendo el derecho a disponer con idéntico efecto (por tanto neutro en la valoración del criterio 3 relativo a la capilaridad) de las oficinas de Correos ...**, pues ..., **el acceso a la red pública resulta esencial en un proceso liberalizador saliente de un régimen de monopolio, sin perjuicio de impedir el aprovechamiento económico derivado de la utilización de redes ajenas.**

## MOTIVOS

El fundamento de la presente petición se encuentra en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda vez que establece que serán nulas *de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, ...*

Asimismo como resulta de la vista del expediente, **la Licitación es nula pues debieron de haberse admitido y valorarse las Oficinas ofertadas por RD Post, identificadas como CORREOS, en el SOBRE N° 2 en referencia al Criterio 6.2 (lotes 2 y 3), , debiéndose haberse haber informado en dicho sentido** y por ello la adjudicación se dictó a sabiendas de su injusticia, de un modo arbitrario, por lo que incurre en la causa de nulidad prevista en el **artículo 47.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, pues pueden considerarse actos administrativos constitutivos de infracción penal, según lo prescrito en el artículo 404 del Código Penal:

*A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años*

Igualmente el fundamento legal del presente recurso se encuentra en el **artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, al concurrir las circunstancias **recogidas el artículo 125 1 a) y b):**

- a) *Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.*
- b) *Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida*

Concretamente el fundamento de fondo del recurso se encuentra en que el procedimiento administrativo recurrido adolece de un grave error de hecho dado que no se han admitido y no se han valorado las Oficinas ofertadas por RD Post, identificadas como CORREOS, en el SOBRE Nº 2 en referencia al Criterio 6.2 (lotes 2 y 3).

Que con posterioridad a dicha Resolución ha aparecido una sentencia de valor esencial para la resolución del asunto que, evidencien el error de la resolución recurrida, concretamente la **Sentencia 1080/2023 de 22 de marzo de 2023 del TSJ de Cataluña sala de lo contencioso**, en la que desestimando el recurso Contencioso interpuesto por CORREOS contra XALOC y RD Post, admite la valoración de las oficinas ofertas por RD Post en base al Contrato con CORREOS, reafirmando el derecho de los operadores postales privados al acceso a la red postal del operador designado para prestar el SPU.

En dicha sentencia en su Fundamento Cuarto e) se afirma que la codemandada (RD POST) puede disponer con idéntico efecto (por tanto neutro en la valoración del criterio 3 relativo a la capilaridad) de las oficinas de Correos es acorde a la legislación, pues como señala la Administración demandada, en su escrito de contestación a la demanda, **el acceso a la red pública resulta esencial en un proceso liberalizador saliente de un régimen de monopolio, sin perjuicio de impedir el aprovechamiento económico derivado de la utilización de redes ajenas.**

Asimismo, en su Fundamento Cuarto c se recoge la doctrina de la STS 663/18 de 24 de abril de 2018, *ya recoge que la negativa de Correos a permitir a los restantes operadores el acceso al servicio de notificaciones en las condiciones establecidas en la LP sin acceder a negociar unas condiciones razonables, transparentes y no discriminatorias, supone una denegación injustificada y contraria a derecho de un recurso esencial para el mercado de notificaciones en el marco regulatorio actual.*

Asimismo en el citado Fº 4 f en referencia a aquella STS 663118, ello atañe a la defensa de la libre competencia, pues se trata de que un servicio de Correos y Telégrafos que venía prestando a los operadores competidores deja de hacerlo pese a su carácter de empresa dominante en el sector, operadora del servicio público universal, y como tal única que disfruta de la presunción legal de fehaciencia y veracidad, que es además gestiona la red postal pública cuya duplicación es inasumible por los competidores, circunstancias todas que hacen que el comportamiento de Correos infrinja con arreglo a la STS citada el artículo 2 de la LDC y el artículo 102 del TFUE, con independencia de que su conducta fuese o no contraria a la regulación legal sobre el acceso a la red postal pública a la que se refiere la sentencia.



La susodicha sentencia concluye en su Fundamento 4 g y h que la interpretación del contrato de 2016 y la addenda del mismo es adecuada a derecho. Y que nos encontramos ante un proveedor del servicio (CORREOS) y ante una integración de la red pública única para todo el Estado en relación a los distintos operadores que actúan en el mismo, sin perjuicio de que su utilización debe comprender un precio justo.

La no valoración por la Mesa de Contratación de las Oficinas relacionadas en la Oferta de RD Post como oficinas de CORREOS, en base al Contrato entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. y Recerca i Desenvolupament Empresarial S.L., ni el acceso a través de la Tarjeta Correos Prepago”, supone una vulneración de la normativa postal, así como; y de facto para RD Post su exclusión en la licitación, con vulneración flagrante de los principios de la contratación pública de igualdad y libre concurrencia.

**Apoyamos nuestra tesis en la vulneración de la Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado, de la normativa de postal , destacando la Sentencia 1080/2023 de 22 de marzo de 2023 del TSJ de Cataluña sala de lo contencioso que confirma la las Resoluciones del Órgano regulador del sector postal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 15 de febrero de 2018 y de 25 de abril de 2018, así como Resoluciones de Tribunales de Contratación, como la Resolución del Tribunal administrativo central de recursos contractuales de 20 de julio de 2018 (Recurso nº 566/2018 C. Valenciana 140/2018 Resolución nº 689/2018) y la Resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público de 12 de abril de 2018 (exp. 66/2018).**

**NULIDAD FALTA DE VALORACIÓN DE LAS OFICINAS DE IDENTIFICADAS COMO “CORREOS”** en el punto 8.2. del PCAP Criterio: Número de oficinas de admisión de envíos, por encima del mínimo exigido (Lotes 2 y 3)

1. Respecto a la relación contractual con la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. y el acceso a sus servicios y medios de su red postal, la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, define la red postal en su artículo 3.12 en el siguiente sentido:

*“12. «Red postal»: a efectos de la presente ley se entiende por red postal el conjunto de la organización y de los medios de todo orden que, empleados por el operador designado para la prestación del servicio postal universal, permiten, en particular:*

*a) La recogida de los envíos postales en los puntos de acceso de todo el territorio nacional.*

*b) La admisión por el operador postal de los envíos postales que le son confiados por el remitente para la realización del proceso postal integral y del que se hace responsable.*

c) La clasificación de estos envíos desde el punto de acceso a la red postal hasta el centro de distribución.

d) El transporte de los envíos postales efectuado por cualquier tipo de medios hasta su distribución final.

e) La distribución realizada en los locales de destino del operador postal correspondiente a donde ha sido transportado el envío postal de forma inmediatamente previa a su entrega final al destinatario del mismo.

f) La entrega en las direcciones indicadas en los envíos, con las salvedades que se establezcan reglamentariamente.”

En el apartado 13 de la propia Ley se define lo que se entiende por punto de acceso a dicha red postal:

*“13. «Puntos de acceso a la red postal»: las instalaciones físicas del operador postal designado para la prestación del servicio postal universal donde los remitentes pueden depositar envíos postales, tales como los centros de admisión masiva, las oficinas, estafetas y buzones a disposición del público.”*

Y el propio RD 1298/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula el acceso a la red postal pública y se determina el procedimiento de resolución de conflictos entre operadores postales, establece en su Artículo 2:

*“Artículo 2. Derecho de acceso a la red postal pública.*

*Los operadores postales con autorización administrativa singular tendrán el derecho de acceder a la red postal pública gestionada por el operador al que el Estado ha encomendado la prestación del servicio postal universal, respecto a los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal. Dicho acceso incluirá las prestaciones de recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega en los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal. El acceso podrá producirse en cualquiera de estas prestaciones, pero comportará el uso de la red postal pública en las siguientes prestaciones hasta finalizar la entrega.”*

2. Respecto al alcance de los trabajos, el propio Pliego de prescripciones técnicas particulares establece en sus puntos 4.2 y 4.6 lo siguiente:

*“4.2. Los trabajos objeto de los lotes 1, 2 y 3, según el caso, consistirán en la **recogida**, admisión, clasificación, transporte y entrega a domicilio de los destinatarios, de los envíos postales generados por los entes adheridos al acuerdo marco, así como las actividades complementarias, adicionales o específicas que requieran los diferentes servicios, incluida la devolución de los envíos cuando no pueda efectuarse la entrega al destinatario, con las garantías y modalidades establecidas por la normativa vigente.”*

*“4.6. Las diferentes unidades acogidas a este acuerdo marco depositarán sus envíos **en la oficina de admisión más próxima** de que disponga la empresa adjudicataria. No obstante, se podrá solicitar la **recogida** de envíos a domicilio en aquellos edificios y centros de la Administración de*



*la Comunidad de Madrid que se especifican en el Anexo III de este Pliego de Prescripciones Técnicas.”*

De tales puntos, se deduce que la operativa que deberá seguir la empresa adjudicataria sería la de recogida de los envíos en las direcciones de los emisores de envíos postales dentro de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, en los casos en los que no sucediera así, las unidades acogidas al acuerdo marco podrán depositar sus envíos en la oficina de admisión más próxima de que disponga la empresa adjudicataria, pero en ningún caso se establece la posibilidad de entrega en cualquier otra oficina del territorio.

De esto modo, y según lo descrito en los puntos anteriores, queda claro que RD POST está facultada para realizar la recogida en cualquiera de las direcciones estipuladas de las entidades adheridas al acuerdo marco, y realizar el depósito de los envíos en cualquiera de las oficinas incluidas en su oferta, incluyendo las que se describen bajo el título de “Contrato Correos”.

3. En el Acta de valoración de ofertas presentadas, la Mesa de Contratación da por hecho, sin solicitar aclaración al respecto, que los centros usuarios del acuerdo marco no podrán acceder directamente a la red de CORREOS:

*“Por parte de la mesa solo se pueden tener en cuenta a efectos de valoración en este criterio las oficinas indicadas en su listado por RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L. con contrato de arrendamiento o contrato de colaboración y no las oficinas en las que el título bajo el cual se tiene el uso de la misma indica contrato Correos ya que por lo que cualquier centro incluido en el ámbito del acuerdo marco cuando tenga que realizar un depósito de envíos debería hacerlo obligatoriamente a través de las oficinas de la empresa seleccionada, es decir, de las que ésta acredite disponer para la recepción de envíos, y esa empresa podría hacer uso de la red postal de CORREOS mediante su entrega en el centro de admisión masiva correspondiente acordado con CORREOS, siguiendo a partir de ahí su curso como el resto de envíos que utilizan dicha red; pero **estos centros usuarios del acuerdo marco no puedan acceder directamente a la red de CORREOS para realizar un depósito** sin pasar por la empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L., siendo esta sociedad la que debe introducirlos directamente en la red para la continuación del proceso hasta su entrega al destinatario final.”*

Si bien pensamos que este requerimiento supone más una barrera de entrada a otros operadores que a necesidades operativas para la gestión de este acuerdo marco, atentando contra la libre competencia del sector, como la propia CNMC establece en varias de sus resoluciones, manifestamos que estas afirmaciones no se corresponden con la realidad.

**La no valoración por la Mesa de Contratación de las Oficinas relacionadas en la Oferta de RD Post como oficinas de CORREOS, en base al Contrato entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. y Recerca i Desenvolupament Empresarial S.L., ha supuesto una vulneración de la normativa postal, así como; y de facto para RD Post su exclusión en la licitación, con vulneración flagrante de los principios de la contratación pública de igualdad y libre competencia.**

Apoyamos nuestra tesis en la vulneración de la Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado, de la normativa de postal , destacando las Resoluciones del Órgano regulador del sector postal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 15 de febrero de 2018 y de 25 de abril de 2018, así como Resoluciones de Tribunales de Contratación, como la Resolución del Tribunal administrativo central de recursos contractuales de 20 de julio de 2018 (Recurso nº 566/2018 C. Valenciana 140/2018 Resolución nº 689/2018) y la Resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público de 12 de abril de 2018 (exp. 66/2018), **y la Sentencia 1080/2023 de 22 de marzo de 2023 del TSJ de Cataluña sala de lo contencioso que confirma la Resolución del TCCSP** y considera que la forma de acreditar la extensión territorial, cuando no se tienen oficinas propias, es tener suscrito convenio con Correos.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

LEY 9 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

---

### Artículo 25. Contratos administrativos.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.

### Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

### Artículo 41. Revisión de oficio.

1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. A los exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de actos administrativos los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos de las entidades del sector público que no sean Administraciones Públicas, así como los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley. La revisión de oficio de dichos actos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad o lesividad de los actos a que se refieren los apartados anteriores el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.

En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al titular del departamento, presidente o director de la entidad que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la subvención primeramente concedida.

4. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en caso de nulidad no será susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente reconocer una indemnización, se elevará el expediente al

órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y expresa, resolverá lo procedente sobre la declaración de nulidad conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. En los supuestos de nulidad y anulabilidad, y en relación con la suspensión de la ejecución de los actos de los órganos de contratación, se estará a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad.

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.

2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus consecuencias.

3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

4. Los efectos establecidos en los apartados anteriores podrán ser acordados por la sentencia que ponga fin al recurso contencioso-administrativo interpuesto previa declaración de lesividad, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

#### **Disposición adicional vigésima octava. Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas.**

1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación pública, tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la normativa reglamentaria de desarrollo de la misma.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.

**Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,**

**Sección 4.<sup>a</sup> Recurso extraordinario de revisión**

**Artículo 125. Objeto y plazos.**

1. *Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.*

*b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.*

*c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.*

*d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.*

2. *El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.*

3. *Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.*

**Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión.**

*Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concorra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1*

**Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.**

1. *Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.*

2. *Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.*

**Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.**

1. *Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si los hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.*

2. *Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.*

3. *El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las*



mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

#### **Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.**

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

- a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- c) Los que tengan un contenido imposible.
- d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

#### **Artículo 108. Suspensión.**

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

#### **Artículo 117. Suspensión de la ejecución.**

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

..

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**  
**SECCION QUINTA**

**Recurso ordinario 150/2018 FASE: OL**

**NIG: 08019 - 33 - 3 - 2018 - 0003371**

**Parte actora:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

**Representante de la parte actora:** ABOGADO ESTADO

**Parte demandada:** RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L. Y XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

**Representante de la parte demandada:** DIEGO SANCHEZ FERRER

**SENTENCIA Nº 1080 / 2023**

**CUARTO.** La pretensión formulada no puede prosperar atendiendo a las circunstancias que se deducen de las actuaciones, y en concreto:

- a. En primer lugar, hemos de señalar que la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya resuelve esta cuestión a 27 de mayo de 2021 cuando reconoce el derecho de la sociedad Recerca i Desenvolupament Empresarial S.L (RD Post) al acceso a los servicios identificados a lo largo de esta resolución como Sistema de Información y Control de Envíos Registrados (SICER) y Prueba Electrónica de Entrega (PEE), que presta la sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A., SME (Correos), tanto para los servicios incluidos en el servicio postal universal (servicios SPU), como para los servicios no incluidos en el servicio postal universal (servicios No SPU).
- b. La cuestión relativa al coste que invoca Correos en su perjuicio en relación al mantenimiento de toda la red de oficinas también se contempla en la citada resolución cuando acuerda requerir a Correos y a RD POST para que inicien de inmediato la negociación para determinar el precio y las condiciones de acceso a estos servicios. Añadiendo que, en defecto de acuerdo entre las partes, podrá ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que lo establezca de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45.3 LSP.

- c. Precisamente sobre ello, la STS 663/18 de 24 de abril de 2018, ya recoge que la negativa de Correos a permitir a los restantes operadores el acceso al servicio de notificaciones en las condiciones establecidas en la LP sin acceder a negociar unas condiciones razonables, transparentes y no discriminatorias, supone una denegación injustificada y contraria a derecho de un recurso esencial para el mercado de notificaciones en el marco regulatorio actual.
- d. Es cierto, a tenor de lo alegado por las partes, que siendo uno el contrato ofertado a la empresa codemandada y a tenor de lo expuesto hasta aquí, los términos del mismo no permitan deducir con absoluta claridad su alcance.
- e. No obstante lo cual, debe concluirse que los servicios que la actora niega que estén en disposición de prestarse por la codemandada no sólo, como afirma la Xarxa Local de Municipis de Girona, sí que han sido prestados por Correos y por tanto admitidos por la empresa actora como debidos sino que además la interpretación que realiza el TCCSP cuando afirma que la codemandada puede disponer con idéntico efecto (por tanto neutro en la valoración de criterio 3 relativo a la capilaridad) de las oficinas de Correos es acorde a la legislación, pues como señala la Administración demandada, en su escrito de contestación a la demanda, el acceso a la red pública resulta esencial en un proceso liberalizador saliente de un régimen de monopolio, sin perjuicio de impedir el aprovechamiento económico derivado de la utilización de redes ajenas.
- f. O como señala la codemandada, refiriéndose también a aquella STS 663118, ello atañe a la defensa de la libre competencia, pues se trata de que un servicio de Correos y Telégrafos que venía prestando a los operadores competidores deja de hacerlo pese a su carácter de empresa dominante en el sector, operadora del servicio público universal, y como tal única que disfruta de la presunción legal de fehaciencia y veracidad, que es además gestiona de la red postal pública cuya duplicación es inasumible por los competidores, circunstancias todas que hacen que el comportamiento de Correos infrinja con arreglo a la STS citada el artículo 2 de la LDC y el artículo 102 del TFUE, con independencia de que su conducta fuese o no contraria a la regulación legal sobre el acceso a la red postal pública a la que se refiere la sentencia.
- g. En este sentido la interpretación del contrato de 2016 y la addenda del mismo es adecuada a derecho. Sin perjuicio por supuesto de la acomodación que pueda proceder entre una y otra a la vista de lo ya expuesto, y que no atañe al presente recurso. Y sin perjuicio de los servicios de custodia que pueden prestarse con las oficinas propias, extremo alegado y que no ha sido desvirtuado.
- h. A ello solo cabe añadir que no se observa precisamente en recta interpretación de lo señalado que nos hallemos ante una subcontratación del servicio sino ante un proveedor del servicio (CORREOS) y ante una integración de la red pública única para todo el Estado en relación a los distintos operadores que actúan en el mismo, sin perjuicio de que su utilización debe comprender un precio justo.

- El subrayado es nuestro para mayor claridad

Por lo expuesto

**SOLICITO:** Tenga por presentado este escrito y en su virtud y en razón a las circunstancias que concurren en el presente supuesto, tenga por interpuesto **RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN** contra la **Orden de 14 de diciembre de 2022 del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda Adjudicar el acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, dividido en tres lotes, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de fecha 12 de diciembre de 2022, al haber obtenido la mayor puntuación, una vez sumados el criterio económico y los criterios objetivos valorables en cifras en los lotes 1, 2 y 3, a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E Expediente: A/SER-014357/2022**, al entender que es contrario a derecho, por no haber valorado las Oficinas ofertadas por RD Post, identificadas como CORREOS, en el SOBRE Nº 2 en referencia al Criterio 6.2 (lotes 2 y 3), lo admita y lo estime en todas sus pretensiones acordando la nulidad de los mismos y por tanto la nulidad de la Licitación **A/SER-014357/2022**.

**OTRO SI DIGO PRIMERO:** Que se identifiquen a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se ha tramitado el referido procedimiento, a efectos de la depuración de la Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. (Disposición adicional vigésima octava. LCSP).

**OTRO SI DIGO SEGUNDO:** La recurrente se reserva su derecho a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la Ley 39/2015 y su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Esta parte se reserva, asimismo, el ejercicio de las acciones legales pertinentes para exigir la responsabilidad patrimonial a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados a mi representada en la tramitación del referido expediente y cuantas otras acciones le asistan en los diferentes órdenes jurisdiccionales.



**OTRO SI DIGO TERCERO:** Solicitamos la **Suspensión de la licitación y la nulidad del Contrato administrativo**, dado el perjuicio que causaría al interés público y el ocasionado al recurrente, al concurrir las siguientes circunstancias:

- a) *Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.*
- b) *Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.*

**OTRO SI DIGO CUARTO:** Se informa a los efectos oportunos de la inminente interposición por ALCSA de RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra la Orden de 14 de diciembre de 2022 del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda Adjudicar el acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, dividido en tres lotes, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de fecha 12 de diciembre de

2022, al haber obtenido la mayor puntuación, una vez sumados el criterio económico y los criterios objetivos valorables en cifras en los lotes 1, 2 y 3, a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E Expediente: A/SER-014357/202.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente el 12 de abril de 2023.

 Firmado digitalmente  
por   
SALVADOR CAMBLO  
(R: B60261815)  
Fecha: 2023.04.12  
18:22:19 +02'00'

FDO: Salvador Cambló Giménez